

**Asamblea General**

Distr. general
5 de agosto de 2015
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

**Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria en su 72º período de sesiones,
20 a 29 de abril de 2015**

Núm. 14/2015 (Egipto)

Comunicación dirigida al Gobierno el 8 de enero de 2015

Relativa a un menor (cuyo nombre conoce el Grupo de Trabajo)

El Gobierno respondió a la comunicación de 8 de enero de 2015 el 18 de febrero de 2015.

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño*.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. El mandato fue prorrogado por otros tres años mediante la resolución 24/7, de 26 de septiembre de 2013. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

* Egipto ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 14 de enero de 1982 y la Convención sobre los Derechos del Niño el 6 de julio de 1990.



c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, o discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. Hay un menor, cuyo nombre conoce el Grupo de Trabajo (en lo sucesivo, “el menor”), que es nacional egipcio y reside habitualmente en Alejandría (Egipto), donde cursa estudios de enseñanza secundaria.

4. El 27 de diciembre de 2014, el menor fue detenido en su domicilio a las 6.00 horas aproximadamente, en presencia de miembros de su familia. Se informa de que un nutrido grupo de fuerzas de seguridad pertenecientes a la Dirección General de Seguridad del Estado llevó a cabo la detención sin que mediara una orden al respecto. El domicilio del menor fue ulteriormente registrado.

5. El menor fue inicialmente detenido durante unas dos horas en la comisaría de El-Dekheila, Alejandría, y posteriormente trasladado a locales de la Dirección General de Seguridad del Estado en Smouha, Alejandría, donde permanece detenido hasta la fecha. No se le ha permitido tener contacto con su familia.

6. El 30 de diciembre de 2014, el menor, junto con otros menores, fue esposado y trasladado a la Oficina del Fiscal, tal como confirmó su familia, quien lo vio a distancia frente al edificio. Se informa de que el menor estuvo representado por un abogado ante el Fiscal.

7. El menor fue inicialmente acusado de destruir un vehículo de la policía el 10 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 18.00 horas, circunstancia que la fuente niega, ya que afirma que el menor se encontraba a la sazón en compañía de uno de sus maestros. Posteriormente fue acusado, junto con otros menores, de participar en una manifestación en apoyo de los Hermanos Musulmanes. Esa afirmación es negada por la fuente, que señala que el menor era apolítico.

8. Según la fuente, el Fiscal decidió inicialmente poner en libertad al menor, junto con otros menores, pero el mismo día se desdijo de esa decisión y confirmó la detención del menor en espera de juicio.

9. La fuente dice que, ya que su familia no ha tenido contacto con el menor desde la fecha de su detención ni información alguna sobre el estado en que se encuentra, teme por su salud y su seguridad.

Respuesta del Gobierno

10. En la comunicación dirigida al Gobierno el 8 de enero de 2015, el Grupo de Trabajo transmitió las imputaciones formuladas por la fuente. El Grupo de Trabajo señaló que agradecería que el Gobierno respondiera facilitando información detallada

sobre la situación del menor a la sazón y aclarando las disposiciones jurídicas que justificaban el hecho de que siguiera detenido. El 18 de febrero de 2015 el Gobierno respondió a la comunicación de 8 de enero de 2015.

11. Según el Gobierno, varios dirigentes de la organización terrorista Hermanos Musulmanes de la zona occidental de Alejandría habían dado instrucciones a varios miembros de la organización, incluido el menor, para que contratasen a delincuentes, comprasen armas de fuego y armas blancas y preparasen bombas y cócteles molotov para utilizarlos contra las fuerzas de seguridad y sus vehículos e instalaciones. El grupo delictivo se denominaba a sí mismo “Ultras las águilas de la libertad”.

12. Se adoptaron las medidas jurídicas requeridas y la Oficina del Fiscal para la Seguridad Suprema del Estado dictó una orden de detención de las personas involucradas. La orden sirvió para detener al menor y otros 23 miembros del grupo delictivo conocido como “Ultras las águilas de la libertad”.

13. Durante las investigaciones, los detenidos admitieron que habían incendiado un vehículo de la policía, atacado a las fuerzas de seguridad y arrebatado sus pertenencias a uno de los agentes. Se descubrió que el menor había tenido relación con la causa administrativa núm. 16981 de 2014 (causa El-Dekheila), relativa al incendio provocado de un vehículo perteneciente al Departamento de Tráfico de Alejandría y a la agresión de un agente. Habida cuenta de lo que antecede, la Oficina del Fiscal decidió someter al menor a prisión preventiva durante 15 días en espera de los resultados de las investigaciones y prorrogó la detención durante el período legalmente permitido, de conformidad con las disposiciones jurídicas pertinentes.

14. El menor detenido estaba separado de los adultos en el Departamento de Traslados de la Dirección General de Seguridad de Alejandría, dado que no podía ser recluido en la División Penitenciaria de Menores de la Dirección General ni en el Departamento Penitenciario General de Menores de El Cairo hasta que se dictara una sentencia definitiva condenándolo a privación de libertad de conformidad con el procedimiento jurídico pertinente.

15. El menor tenía buena salud y no padecía ninguna enfermedad crónica. Fue visitado por su padre todos los lunes durante las horas oficiales de visita.

Comentarios de la fuente

16. El 24 de marzo de 2015, la fuente presentó sus comentarios a la respuesta del Gobierno.

17. Según la fuente, el Gobierno de Egipto da por sentado que el menor participó en actividades antigubernamentales. Sin embargo, no se facilitan fechas concretas, lugares ni pruebas. A este respecto, la fuente afirma que, en la respuesta del Gobierno, se menciona frecuentemente al grupo, pero nunca al menor a título individual.

18. La fuente afirma que toda privación de libertad ha de basarse en una orden judicial. El menor fue detenido en su domicilio a primeras horas de la mañana del 27 de diciembre de 2014 con el permiso de la fiscalía y quedó recluido en dependencias de la Dirección General de Seguridad del Estado en Alejandría. La fuente sostiene que la respuesta del Gobierno muestra que este no pudo demostrar haber emprendido ninguna investigación sobre la legalidad y la arbitrariedad de la detención del menor.

19. El menor está acusado de participación política en el grupo de los Hermanos Musulmanes, pese a que se encontraba entre los partidarios del Presidente, Abdul Fattah al-Sisi, y toda su familia votó por el Sr. Al-Sisi en las elecciones presidenciales. La afirmación del Gobierno sobre la participación política del menor no se basa en ninguna prueba y tal vez se inventó para mantener encarcelado al menor.

20. Además, la fuente rechaza la afirmación del Gobierno de que el menor se confesó culpable de todos los cargos. La fuente afirma que el menor no fue reconocido por los demás detenidos. El registro realizado en la vivienda de su familia no arrojó ninguna prueba contra él. Como no había ninguna prueba para encarcelarlo, se debía haberlo dejado libre.

21. La fuente rechaza la afirmación del Gobierno sobre el estado de salud del menor y sostiene que este es tartamudo y que su estado de salud es inquietante.

22. La fuente afirma asimismo que, dado que el menor es un alumno de secundaria, su detención ha interrumpido sus estudios. Además, ha producido un efecto devastador en él y en toda su familia.

Deliberaciones

23. Con arreglo a sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión sobre el caso sobre la base de la información que se ha facilitado.

24. La fuente y el Gobierno no han facilitado mucha información precisa sobre el proceso penal para que el Grupo de Trabajo pueda fundamentar su opinión. En el presente caso, las cuestiones principales guardan relación con la competencia de la Oficina del Fiscal para la Seguridad Suprema del Estado de emitir una decisión sobre la privación de libertad en espera de juicio, así como sobre el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos pertinentes por lo que respecta a la detención del menor en el Departamento de Traslados de la Dirección General de Seguridad de Alejandría.

25. El Grupo de Trabajo señala que, de conformidad con la fuente, el menor es un estudiante de secundaria de 17 años que lleva recluido desde el 27 de diciembre de 2014 en el Departamento de Traslados de la Dirección General de Seguridad de Alejandría. En su respuesta, el Gobierno confirmó que el menor se encontraba recluido en esos locales, ya que, de conformidad con las normas procesales pertinentes, no podía ser recluido en la División Penitenciaria de Menores de la Dirección General ni en el Departamento Penitenciario General de Menores de El Cairo hasta que se dictara una sentencia definitiva condenándolo a privación de libertad.

26. El Grupo de Trabajo señala que el Gobierno afirmó que el menor había estado separado durante cuatro meses de los reclusos adultos en el Departamento de Traslados de la Dirección General de Seguridad de Alejandría. El Grupo de Trabajo considera que la detención irregular durante tan largo período en las instalaciones de un organismo de seguridad constituye una grave violación de los requisitos relacionados con la prisión preventiva.

27. El Grupo de Trabajo manifiesta profunda preocupación por el hecho de que no se hayan facilitado más detalles sobre la adecuación de la detención del menor a las normas internacionales vigentes de derechos humanos y, en particular, al principio de que la privación de libertad de un menor se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda, según lo dispuesto en el artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Egipto el 6 de julio de 1990, y confirmado en los artículos 1 y 2 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y en los artículos 13.1, 18.2 y 19.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).

28. El menor está recluso en virtud de una decisión de la Oficina del Fiscal para la Seguridad Suprema del Estado y nunca se le ha hecho comparecer ante la autoridad judicial para que esta pudiese verificar la legalidad de su detención y su reclusión por los agentes de la seguridad del Estado. En su observación general núm. 35 (2014), sobre la libertad y seguridad personales (párr. 32), el Comité de Derechos Humanos reafirmó que el artículo 9 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigía que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal fuese llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Ese requisito se aplica en todos los casos sin excepción y no depende de la elección de la persona privada de libertad ni de su capacidad para exigir su cumplimiento. El requisito es de aplicación incluso antes de que se hayan presentado acusaciones formales, siempre y cuando la persona haya sido detenida o esté reclusa por haber cometido presuntamente una actividad delictiva. La finalidad de este derecho es que la reclusión de una persona en el marco de una investigación o proceso penal sea sometida a control judicial. Es inherente al correcto desempeño de la función judicial que la autoridad que la ejerza sea independiente, objetiva e imparcial en relación con las cuestiones de que se trate. En consecuencia, los fiscales no podrán ser considerados funcionarios que ejercen funciones judiciales en el sentido del artículo 9 3) (véase la observación general núm. 35, párr. 32).

29. El Grupo de Trabajo comparte las opiniones del Comité de Derechos Humanos de que, aunque el significado exacto de “sin demora” puede variar en función de circunstancias objetivas, los plazos no deberán exceder de unos pocos días desde el momento de la detención. A juicio del Comité, un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para trasladar a la persona y preparar la vista judicial; todo plazo superior a 48 horas deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas. En el caso de los menores deberá aplicarse un plazo especialmente estricto, por ejemplo de 24 horas. La persona deberá comparecer físicamente ante el juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. La presencia física de las personas reclusas en la vista permite que se les pregunte sobre el trato que han recibido durante la reclusión, y facilita el traslado inmediato a un centro de prisión preventiva si se ordena que continúe la reclusión. Por tanto, es una garantía para el derecho a la seguridad personal y la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En esa vista, y en las vistas posteriores en que el juez evaluará la legalidad o la necesidad de la reclusión, la persona tendrá derecho a asistencia jurídica, que en principio deberá proporcionarle un abogado de su elección (véase la observación general núm. 35, párrs. 33 y 34).

30. El Gobierno no demostró que hubiese protegido los derechos y garantías procesales del menor ni su derecho a un juicio imparcial de conformidad con los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es vinculante para Egipto de resultas de su ratificación. Además, ello entrañó una vulneración del artículo 14 de las Reglas de Beijing. El presente caso entra dentro de las categorías I y III.

31. El Grupo de Trabajo expresa honda preocupación en relación con el presente caso, el cual, cuando se examina junto con las opiniones previamente aprobadas sobre Egipto, indica la existencia de detenciones arbitrarias de jóvenes de carácter sistémico y generalizado. El Grupo de Trabajo considera asimismo que las violaciones del derecho fundamental a no ser sometido a una privación arbitraria de libertad, derecho que no puede dejarse en suspenso, darán lugar a que las ulteriores condenas carezcan de seguridad.

Decisión

32. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de un menor es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.

33. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del menor y ponerla en consonancia con las normas y los principios establecidos en la Declaración Universal y el Pacto.

34. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que ponga de inmediato en libertad al menor y le conceda el derecho efectivo a obtener reparación de conformidad con el artículo 9 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobada el 27 de abril de 2015]
